

## Colombia

# Las secuelas en la salud mental que les dejó la guerra a los excombatientes

Una encuesta a 27.000 personas que dejaron las armas muestra que sufren episodios de depresión, ansiedad, sicosis y otros traumas.

REDACCIÓN PAZ | @PazyJusticiaET

Al menos a un tercio de 27.000 excombatientes en proceso de readaptación a la vida civil la guerra les dejó secuelas en la salud mental.

Así lo determinó una encuesta hecha por la Universidad Externado y la Agencia para la Reinserción y Normalización (ARN) a excombatientes que adelantaron su proceso de reincorporación entre el 2010 y el 2014.

Al 31 por ciento de esa población, unas 8.370 personas, entre las que hay exguerrilleros y exparamilitares, el conflicto les dejó estrés postraumático.

Este daño en la salud mental se refleja en comportamientos autodestructivos como la hostilidad, la desconfianza o el miedo, entre otros. Además, de ese estrés derivan otros padecimientos como la ansiedad y la depresión.

La medición ha servido de insumo para diseñar los parámetros de atención psicológica a la población que dejó las armas y que sigue en proceso de reincorporación a la civilidad.

La encuesta evidenció, además, que si bien los excombatientes están afectados mentalmente por la guerra, otros traumas se deben a lo que enfrentan tras dejar las armas, como la dificultad para la inserción la-

boral, para el reencuentro con sus familias, la inseguridad y el riesgo para sus vidas. Los afecta también la presencia de grupos que los inducen a reincidir en el delito y los temores al rechazo.

Para el caso de las Farc, lo que más puede repercutir en los factores que afectan la salud mental de los exguerrilleros, de acuerdo con la investigación, "son los desafíos de desenvolverse en un contexto político francamente enrarecido y polarizado".

Del total de encuestados y afectados por estrés postraumático, un 27,3 por ciento sufren ansiedad; un 26,2 por ciento padecen trastorno explosivo intermitente del control de los impulsos; un 23 por ciento convive con estados maníacos; un 17,1 por ciento tiene depresión; el 13,8 por ciento sufre de juego patológico y un 10 por ciento experimenta psicosis.

El consumo problemático de alcohol también afecta al 7,8 por ciento de la población desmovilizada y el consumo de sustancias psicoactivas, al 4,1 por ciento.

El investigador Diego Mauricio Aponte fue quien estuvo a cargo de diseñar la encuesta "con el objetivo de detectar problemáticas de salud mental y mejorar los procesos de atención psicosocial que brinda la ARN".

El sondeo, que ha sido la base para hacerle seguimiento al proceso de reincorporación de excombatientes que atiende esa agencia del Estado, fue abordado por Aponte junto con el investigador José Zapata en el libro "Salud mental en el contexto Desmovilización Desarme y Reinserción: trayectorias, espectros de sufrimiento y calidad de vida en población desmovilizada del conflicto armado colombiano".

## DE ESTO SUFREN LOS DESMOVILIZADOS

Encuesta aplicada a 27.000 excombatientes

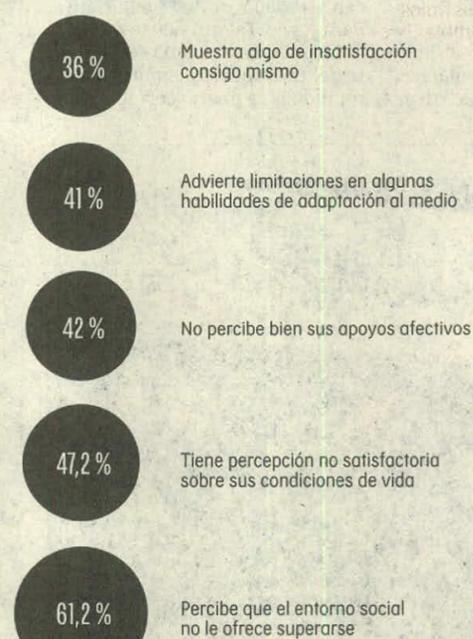
4.500 (17 %) presentan un mayor riesgo de volver a las armas



## EL ENTORNO DEL EXCOMBATIENTE



## PERCIBEN UN POBRE CALIDAD DE VIDA



Fuente: U. Externado y ARN

Sin embargo, el estudio advierte que la solución a estos problemas de salud mental que agobia a los excombatientes está "lejos del manicomio".

Para superar estos trastornos mentales los investigadores recomiendan fortalecer las capacidades de los desmovilizados, los reencuentros y apoyos familiares y la activación de proyectos colectivos.

Entre otras acciones que recomiendan están "el apoyo a la inserción laboral, a la formación, a la prevención de distintas formas de violencia; a la disminución y el desestimulo de la delincuencia y la ilegalidad".

La inquietud inicial de esta encuesta era identificar esos rasgos durante su reincorporación y ver "hasta qué punto el camino recorrido por quienes se encuentran en el proceso de desmovilización e integración a la vida civil está en peligro de ser 'desandado'".

"Se trata de comprender los diversos síntomas o trastornos ocasionados por la experiencia del conflicto armado como resultado de duelos, daños en la salud mental, exposición a experiencias crueles y de barbarie, frustración, exclusión, estrés crónico y rupturas emocionales y de vínculo social de sus participantes", explican los investigadores.

Aponte y Zapata también dicen que para el buen curso de la reincorporación es clave entender "el malestar derivado de la transición de las dinámicas de vida militar y del conflicto armado a las dinámicas de la vida civil y el proceso mismo de reintegración".

## El tema de la reincidencia

De los 27.000 excombatientes encuestados y que han hecho el proceso de readaptación a la vida civil, unos 4.500, es decir el 17 por ciento, tiene mayor riesgo de retornar a la actividad armada.

Ese 17 por ciento que está expuesto a un mayor riesgo de volver a las armas mostraron más de tres signos como "carencias en el acatamiento de la ley", "presencia de redes delictivas", "desequilibrio entre habilidades sociales y laborales y de oportunidades" y "normalización de pautas culturales de guerra".

Una de las características que más presenta la población desmovilizada, reflejada en un 93 por ciento de los encuestados, es la dificultad que tienen para resolver conflictos o comunicarse en el contexto de la reintegración.

La investigación mostró, en todo caso, que un 70 por ciento de excombatientes tiene experiencias exitosas en cuando a su no reincidencia en el delito. Esto es positivo si se compara con el índice de reincidencia de quienes responden ante la justicia ordinaria, que está en un 70 por ciento.

"Si bien hay algunos riesgos de reincidencia, estas no son mayoritarias. De manera que la decisión de ingresar a grupos armados se explica mejor por condiciones del contexto social y cultural de la violencia política", concluye la investigación.

## Congresistas de EE. UU. envían carta a Duque sobre dudas con militares

CITAN REPORTE DE HUMAN RIGHTS WATCH SOBRE 'COMANDANTES DEL EJÉRCITO ASOCIADOS CON ASESINATOS', EN REFERENCIA A LOS LLAMADOS 'FALSOS POSITIVOS'.

Un grupo de senadores de Estados Unidos envió una carta al presidente Iván Duque en la que le expresan su preocupación por el nombramiento de militares en altos cargos en el Ejército pese a que hay dudas sobre ellos en temas de derechos humanos.

En la carta, los congresistas mencionan en particular el caso del actual comandante del Ejército, mayor general Nicasio de Jesús Martínez, cuyo ascenso al grado de general será evaluado esta semana por el Congreso colombiano.

"Queremos hacerle saber que estamos preocupados por un reciente informe de Human Rights Watch (HRW). Ese reporte, titulado 'Colom-

bia, nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos', documenta el nombramiento de oficiales a altos cargos en el Ejército a pesar de existir evidencia creíble de que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto", dicen en la carta Patrick Leahy, demócrata de más alto rango en la Comisión de Apropiedades; Ben Cardin, que ocupa ese mismo puesto en el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, y Chris Van Hollen, miembro de este último subcomité.

En la misiva, los senadores hablan del caso de Martínez y de otros ocho oficiales que nombró Duque en su cúpula

militar que aparecen en el reporte de HRW, supuestamente vinculados a los llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales, que salieron a la luz la década pasada y consistían en asesinar a civiles y luego presentarlos como rebeldes para inflar las bajas en combate.

Particularmente, el actual comandante del Ejército ha dicho que desempeñaba labores administrativas cuando ocurrieron los casos con los que lo relaciona HRW y que, por lo tanto, no conocía las operaciones militares en las que se lo menciona.

"Reconocemos que, como en Estados Unidos, se presume la inocencia de un individuo hasta que el crimen del

que se lo acusa sea comprobado. Pero eso no quiere decir que deban ser promovidos a los más altos cargos del Ejército. Por el contrario, cualquier persona que haya sido vinculada a crímenes tan terribles, como los que documenta HRW, debería ser suspendida de cargos con responsabilidad de mando y ser inelegible para un ascenso hasta que el caso sea investigado plenamente y resuelto", dicen los senadores tras indicar que llevan años haciéndole seguimiento al caso de los 'falsos positivos'.

En su carta, también le expresan a Duque estar "decepcionados porque los altos oficiales que supuestamente dieron las órdenes y luego encubrieron los crímenes han evadido la justicia", y le piden mediar la situación. En el papel, los senadores también expresan preocupación por la seguridad del sargento Carlos Alberto Mora, cuyo testimonio sirvió para condenar a

ciertos oficiales responsables de 'falsos positivos'.

"En el 2008, Mora ayudó al comando sur en la búsqueda de tres ciudadanos de EE. UU. que fueron secuestrados por las Farc y una década después se graduó con honores como instructor de alto rango para derechos humanos en el Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental en el fuerte Benning.

"Nos preocupa que tras su regreso a Colombia ha sido ignorado y maltratado en las Fuerzas Armadas. Y estamos en alarma por su seguridad tras conocer que oficiales contra los que declaró ya han salido de prisión", sostienen los legisladores antes de pedirle a Duque que lo nombre en un puesto militar en el extranjero para protegerlo.

Sergio Gómez Maseri, corresponsal EL TIEMPO en Washington. En Twitter: @sergom68